



Nº EXPEDIENTE: 001-001260
FECHA: 18 de febrero de 2015

Madrid, 9 de marzo de 2015

1º. Con fecha 18 de febrero de 2015 tuvo entrada en este Ministerio una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número de expediente 001-001260.

2º. Con fecha 27 de febrero de 2015 dicha solicitud se recibió en esta Subsecretaría, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución.

3º. En relación con la solicitud planteada relativa a la auditoría operativa del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía correspondiente al ejercicio 2014, elaborada por la Inspección General de Servicios de este Ministerio, se comunica lo siguiente:

- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone en su artículo 14 relativo a los límites al derecho de acceso, que tal derecho *"podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para (...) e) la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. (...) g) las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; (...) j) el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial"*.
- En íntima conexión con los extremos antes citados, en virtud del apartado c) del artículo 18 de la mencionada ley 19/2013, se consideran no admisibles las solicitudes *"relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración"*.
- El Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales relaciona, entre las funciones y actividades a desarrollar por éstas en el apartado d) de su artículo 2 la de *"realizar auditorías internas en las unidades y servicios y verificar el desarrollo y cumplimiento de planes y programas de actuación, así como el ajuste de los resultados a los objetivos propuestos"*. Asimismo, el apartado 1 del artículo 14 de este Real Decreto señala que el personal que se integre en las Inspecciones de Servicios *"estará obligado al sigilo profesional en relación con las actuaciones que realicen, que se extenderá a todos los datos, antecedentes, informes y a la información de cualquier tipo a que tenga acceso en el cumplimiento de sus funciones"*. Por la propia naturaleza de este tipo de actuaciones, en una auditoría operativa se hace un análisis fidedigno de la organización de que se trate, poniendo de manifiesto tanto sus aspectos positivos como aquellos otros en los que se puedan apreciar disfunciones, carencias, incluso responsabilidades por parte de algunos de sus integrantes. Todos esos aspectos se ponen de manifiesto, precisamente, para su corrección en plazo razonable o para el inicio de otras actuaciones entre las que se pueden encontrar las de depuración de posibles responsabilidades. De ahí precisamente que la actuación de los equipos inspectores esté presidida por el principio de sigilo profesional, principio no compatible con el de publicidad de lo actuado.



- La actuación auditora efectuada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía contiene numerosos datos de carácter personal, empresarial, de seguridad de edificios y bienes, protegidos por su naturaleza, y no susceptibles de ser desagregados del texto unitario, posibilidad contemplada en el artículo 16 de la mencionada ley 19/2013 relativo al acceso parcial de la información, pero que, de aplicarse, desvirtuaría el contenido y naturaleza del documento resultante.

Por todo lo cual, se **RESUELVE** denegar el acceso a la auditoría operativa del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, llevada a cabo por la Inspección General de Servicios de este Departamento.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse previa y potestativamente reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución.

Fernando Benzo Sáinz

